



Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general
17 de junio de 2014
Español
Original: inglés

Comité contra la Tortura 49º período de sesiones

Acta resumida de la 1111ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el jueves 8 de noviembre de 2012, a las 15.00 horas

Presidente: Sr. Grossman

Sumario

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19
de la Convención (*continuación*)

Segundo informe periódico de Tayikistán (continuación)

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.4108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.12-47408 (S) 270514 170614



* 1 2 4 7 4 0 8 *

Se ruega reciclar



Se abre la sesión a las 15.00 horas.

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención (continuación)

Segundo informe periódico de Tayikistán (continuación) (CAT/C/TJK/2; CAT/C/TJK/Q/2 y Add.1)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Tayikistán toma asiento a la mesa del Comité.*
2. **El Sr. Salimzoda** (Tayikistán) señala que el artículo 143 del Código Penal establece las sanciones aplicables en casos de tortura, trato degradante y malos tratos. Estas dos últimas prácticas suelen considerarse distintas de la tortura y son sancionadas con una pena de cárcel de entre 2 y 5 años. La sanción prevista en este mismo artículo para la tortura es la pena de prisión de entre 5 y 15 años, dependiendo de la gravedad del delito. En cualquier caso, las penas severas no son siempre el medio más eficaz de prevenir un delito.
3. El Tribunal Supremo ha definido la detención como el hecho de privar a una persona de su libertad de movimiento y retenerla en un lugar específico. Aunque el registro del detenido puede realizarse en una fase posterior, la detención comienza en el momento en que la persona ingresa en una celda. En el momento de la detención, se informa por escrito al detenido de sus derechos y se le proporciona una copia del documento pertinente. Se garantiza a los detenidos asistencia médica y jurídica, se informa a su familia de la detención y se concede a su abogado acceso a la documentación pertinente, incluido el registro de detención. Toda persona que sea interrogada, así no esté detenida oficialmente, tiene también derecho a recurrir a los servicios de un abogado. Toda persona que haya permanecido detenida durante 72 horas es remitida a un centro de prisión preventiva con el fin de garantizar la protección de sus derechos. Si no se logran reunir pruebas incriminatorias en el plazo de diez días desde el comienzo de la detención, la persona es puesta en libertad.
4. En los casos de extradición desde o a Tayikistán, se observan las normas internacionales. Tayikistán no solo proporciona garantías diplomáticas, sino que también toma otras medidas, como permitir a los funcionarios del país extranjero que solicita la extradición inspeccionar las condiciones de detención previas a la extradición. En virtud de las garantías otorgadas por los países solicitantes, los detenidos que han sido extraditados han disfrutado de los mismos derechos que los detenidos en Tayikistán. Además, conforme al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las personas extraditadas pueden recurrir a un mecanismo internacional de denuncia. Antes de proceder a la extradición de una persona, se pide al país receptor garantías de que esta no será sometida a tortura. No se ha recibido ninguna información que indique que alguna de las personas extraditadas en los últimos cinco años haya sido objeto de tortura.
5. En 2011 entró en vigor una nueva ley sobre las condiciones de detención de los sospechosos, acusados y personas que están siendo enjuiciadas. Todas estas personas tienen derecho a un acceso ilimitado a la asistencia jurídica y médica desde el momento de su detención y pueden recibir visitas de sus familiares. Se han adoptado medidas para preservar los derechos de los detenidos; en particular, el Ministerio del Interior mantiene en duplicado dos ejemplares del registro de detenidos, el cual contiene todos los detalles relativos a la detención.
6. Una persona puede permanecer detenida un máximo de dos meses. Para que este período pueda prolongarse, debe hacerse comparecer al detenido ante el fiscal, que puede presentar una solicitud de prórroga al tribunal. El tribunal examina la solicitud en sesión pública y en presencia del detenido y su abogado. Alrededor del 80% de los casos penales

se resuelve dentro del plazo de dos meses, pero en casos complejos, la persona puede permanecer detenida hasta 18 meses.

7. La difamación se ha despenalizado; toda persona acusada de difamación es ahora juzgada en procesos civiles. La puesta en libertad de un agente de policía tras una condena por tortura no repercute en la situación jurídica de la víctima de tal tortura.

8. Por el momento, debido a dificultades financieras, no es posible ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura. Se continúa trabajando en la abolición de la pena de muerte.

9. Con la colaboración de las ONG, se han tomado diversas medidas para sensibilizar al personal médico y a los miembros de las fuerzas del orden sobre la tortura y proporcionarles información al respecto. Entre los temas que se han tratado en los cursos y seminarios ofrecidos figuran la función del fiscal, los derechos individuales, las consecuencias de la tortura y la violación, y la lucha contra la tortura. Se han publicado libros sobre los derechos humanos, y especialistas de la salud han participado en seminarios específicos sobre la aplicación del Protocolo de Estambul. Se han llevado a cabo diversas actividades en colaboración con otros Estados, y algunos funcionarios han asistido a seminarios sobre diferentes aspectos relacionados con la tortura y los derechos humanos en otros países.

10. Se ha promulgado un decreto especial con el objetivo de reforzar los derechos de los presos preventivos. Se ha establecido un servicio de asistencia telefónica que permite a todos los ciudadanos denunciar actos de tortura, incluidos los cometidos por la policía. Una fiscalía especial se encarga de vigilar la aplicación la ley en los lugares de detención y todos los lugares de detención, incluidos los centros de prisión preventiva, se inspeccionan regularmente. En el período que va de 2008 a 2012, la Fiscalía recibió más de 100 denuncias de tortura o malos tratos que condujeron a varias investigaciones y procesos penales. Se ha condenado a algunos funcionarios y se han impuesto condenas largas de cárcel. El Defensor del Pueblo también participa activamente en la prevención de la tortura en los lugares de detención. Se han introducido medidas para mejorar la tramitación de las denuncias de tortura y malos tratos, y los denunciantes disfrutan de garantías de confidencialidad. Se ha establecido un mecanismo especial de denuncias dentro de las cárceles.

11. En lo que concierne a la denuncia de que los médicos realizan demasiados exámenes en poco tiempo, el orador observa que la información que tiene ante sí el Comité parece referirse a un recurso en concreto interpuesto contra una sentencia de diciembre de 2011, y fundado en alegaciones de tortura. En ese caso particular, el Tribunal Supremo examinó los hechos y modificó la sentencia original.

12. En cuanto a Bahromiddin Shodiev, este falleció como consecuencia de graves lesiones tras haber saltado desde la ventana de un primer piso en un presunto intento de suicidio. Se está realizando una investigación para determinar si hubo incumplimiento del deber por parte de los agentes del orden.

13. Por lo que se refiere a Abdulvosi Latipov, este puesto en libertad por la Federación de Rusia en octubre de 2012 y actualmente es objeto de una orden de búsqueda y captura por delitos graves. En los últimos seis meses, agentes de la policía implicados en casos de fallecimiento han recibido condenas de cárcel, y un alto funcionario ha sido declarado culpable de incumplimiento del deber.

14. **El Sr. Zafar** (Tayikistán) dice que, desde que obtuvo la independencia, su país ha tomado medidas para promover los derechos y libertades de los ciudadanos, consagrados en la Constitución y protegidos por esta en su calidad de valores supremos del país. El poder judicial es independiente y administra justicia en nombre del Estado. Desde la

independencia, se han aplicado reformas para mejorar el sistema judicial y darle una función más destacada en la protección de los derechos humanos. En particular, se han adoptado iniciativas para impartir formación a los jueces y el personal de varios órganos judiciales, y un consejo independiente ha introducido medidas para mejorar el salario y las condiciones de trabajo de los jueces. Varios asociados internacionales han colaborado notablemente en la aplicación de las reformas judiciales.

15. Las estadísticas sobre el número de causas llevadas ante los tribunales indican que la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial ha aumentado desde que se estabilizó la situación del país. En efecto, se ha incrementado el número de personas que recurren a los órganos judiciales para la protección de sus derechos. Los ciudadanos pueden, y regularmente lo hacen, someter a los tribunales casos relativos a la protección o la violación de sus derechos en todos los ámbitos; si no están de acuerdo con el fallo emitido en primera instancia, pueden interponer un recurso ante un tribunal superior. La legislación del país aspira a proteger los derechos a través del sistema judicial y a proporcionar acceso a la justicia tanto en la ley como en la práctica.

16. Si al tribunal se le presentan pruebas de tortura, está obligado a examinarlas; si no lo hace, cualquier sentencia que emita será revocada. El tribunal también está obligado a tomar las medidas adecuadas para examinar las denuncias de tortura o, si es necesario, a remitir el caso al fiscal para que lo investigue. El tribunal no puede declarar admisibles las confesiones realizadas bajo coacción u obtenidas mediante malos tratos, y todas las sentencias que se dicten deben estar basadas en pruebas, no en conjeturas. El tribunal únicamente podrá tener en cuenta una confesión cuando esté respaldada por otras pruebas.

17. En marzo de 2012, se examinó un caso en que el acusado alegaba haber sido torturado para obligarlo a confesar. El juez competente remitió el asunto a peritos, que declararon que no se habían observado señales de tortura en el cuerpo del acusado. En otro caso, el juez reconoció que había habido tortura y el acusado fue declarado inocente y puesto en libertad. Si un tribunal no examina adecuadamente las denuncias de tortura, las instancias superiores están obligadas a tomar medidas.

18. Los procedimientos y condiciones especiales para los menores en conflicto con la justicia están claramente establecidos en la legislación. Los menores solo son detenidos si han cometido un delito particularmente grave. En todos los procedimientos relacionados con menores se exige la presencia de un abogado. La legislación específica sobre la responsabilidad penal y las penas de los menores prevé que si el primer delito de un menor no es grave, se le impondrá una multa o se le ordenará realizar servicios a la comunidad. Las sentencias impuestas a los menores son, por lo general, menos severas que las de los adultos.

19. **El Sr. Alizoda** (Tayikistán) dice que la cuestión de las visitas a los lugares de detención se ha estudiado en profundidad y es una prioridad para el período 2011-2015. Durante este período, el Defensor del Pueblo visitará los lugares de detención en compañía de representantes de ONG y de los medios de comunicación. También se están inspeccionando las instituciones psiquiátricas, los centros médicos, los hospitales y otros lugares para documentar los casos de tortura y comprobar que la ley se aplica en la práctica. Se preparará un informe especial sobre los resultados de las actividades de inspección. La ley autoriza al Defensor del Pueblo y sus representantes a visitar cualquier lugar de detención sin previo aviso. El Instituto de Derechos Humanos de Dinamarca ha elaborado unas directrices para vigilar el respeto de los derechos humanos en los lugares de detención; estas son utilizadas por el personal de la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones de vigilancia. Las denuncias de tortura que se presentan ante el Defensor del Pueblo son investigadas por la Fiscalía; en un caso, ya han llevado a la apertura de procesos penales.

20. El orador destaca que la tortura es, en todos los casos, un delito punible por ley. La negligencia constituye un delito distinto, y los funcionarios responsables de negligencia pueden ser objeto tanto de procedimientos penales como disciplinarios.

21. **El Sr. Ashurov** (Tayikistán) indica que, en 2012, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes visitaron Tayikistán. Su Gobierno seguirá colaborando activamente con los titulares de mandatos de los procedimientos especiales, en cumplimiento de sus compromisos internacionales.

22. Desde 2010, los agentes de las fuerzas del orden y los funcionarios de prisiones reciben formación regular sobre los mecanismos nacionales e internacionales de prevención de la tortura. Este programa, que se organiza en colaboración con las ONG y los asociados internacionales, se han ido extendiendo progresivamente, y sus seminarios han contado con la participación de personal de muchos organismos gubernamentales, como el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

23. En cuanto a las discusiones con el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la autorización a la organización para visitar los lugares de detención de Tayikistán, todavía no se ha alcanzado un acuerdo.

24. En 2011, el organismo rector de la construcción y la arquitectura decretó que todas las nuevas edificaciones debían ajustarse a las normas jurídicas más recientes, incluidas las normas que velan por que, en el diseño de viviendas y edificios públicos, se tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad.

25. **El Sr. Oripov** (Tayikistán) afirma que la legislación nacional prevé el derecho de los detenidos a acceder a un médico o a servicios de salud. En el marco de las investigaciones preliminares, los detenidos deben pasar un examen médico y obtener un certificado de salud. De hecho, la ley permite que los detenidos le pidan a su propio médico que les haga el examen, pero normalmente los exámenes se realizan en centros del Ministerio de Salud, que no dependen del Ministerio del Interior, sino que son administrados por su propio personal y conforme a sus propias normas.

26. En virtud del párrafo 7 del Programa Nacional para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombre y Mujeres (2001-2010), se han tomado medidas para prevenir la violencia doméstica. En 2007, con la cooperación del Ministerio del Interior y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, se puso en marcha un proyecto conjunto destinado a combatir la violencia doméstica. En el marco de este proyecto, se realizaron acciones sustantivas para garantizar la investigación de los casos de violencia doméstica, la sanción de sus autores y la protección de las víctimas. Se instituyó mediante decreto la función de inspector de violencia doméstica; se celebraron cuatro sesiones de formación a las que asistieron más de 500 personas que trabajan en el ámbito de las cuestiones de género y la violencia doméstica. Por último, se abrieron cinco centros de consulta especializados en la atención de mujeres y niños víctimas de la violencia. .

27. También se tomaron medidas preventivas para combatir la violencia doméstica. En 2010 y 2011, el Ministerio del Interior dictó tres decretos distintos dirigidos a sus oficinas subsidiarias sobre la reunión sistemática de datos en esa esfera; se están analizando los datos reunidos y se está preparando un informe centralizado sobre la violencia doméstica. En el marco de sus actividades de prevención, los inspectores del Ministerio realizan numerosas reuniones en escuelas y aldeas. Gracias a su trabajo, se detectaron alrededor de 50 casos de violencia doméstica, de los cuales aproximadamente 35 fueron llevados a los tribunales. Otros casos están siendo objeto de seguimiento. Se ha establecido

un grupo de trabajo sobre violencia doméstica contra los jóvenes, además de una oficina especial encargada de sensibilizar a los grupos más vulnerables.

28. Desde 2010, se han registrado tres casos de tortura a menores. Los responsables han sido declarados culpables y condenados y, adicionalmente, se han tomado medidas preventivas. El Ministerio del Interior ha introducido cambios en los procedimientos vigentes para prevenir futuras violaciones de los derechos de los menores, y se ha establecido una unidad especial para velar por los intereses y derechos de estos. En virtud del artículo 62 del Código Penal, el hecho de que la víctima de un delito sea menor constituye una circunstancia agravante. El Gobierno ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 2003 y ha establecido una comisión especial encargada de informar directamente al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Cuando se detecta violencia contra menores, se toman medidas, y, para enfrentar estas situaciones, se han introducido diversas disposiciones legislativas y sanciones. La política nacional es continuar trabajando para mejorar las leyes y procedimientos y para garantizar la protección de los derechos y la dignidad de las personas, a fin de lograr la conformidad con las normas internacionales.

29. **El Sr. Abdulhakov** (Tayikistán) dice que, en el marco de una campaña para humanizar los lugares de detención, se ha tomado la decisión política de transferir al Ministerio de Justicia la responsabilidad sobre estas instituciones. Se han introducido varias medidas legislativas con el fin de mejorar las condiciones de detención y la situación de los detenidos y ajustar la legislación nacional a las normas internacionales. Un grupo de trabajo creado con el apoyo de la Oficina de Cooperación Suiza en Dushambe ha elaborado una serie de normas y ha mejorado la calidad de la comida de los centros de detención, así como la iluminación, el suelo y los servicios de dichos centros. El número de menores en los centros de detención se ha reducido en cerca de un 65%. En el marco de las normas y leyes recientemente aprobadas, el número de menores condenados a penas de prisión se ha dividido por tres en los últimos años.

30. Las condiciones de detención y la situación jurídica de los reclusos se establecen claramente en el nuevo Código de Procedimiento Penal, y se están tomando medidas para mejorar estas condiciones. Actualmente se debaten las ventajas respectivas de los establecimientos correccionales y los centros de detención por lo que se refiere a la rehabilitación de los reclusos. La ley prevé que las mujeres y los jóvenes infractores deben estar separados de los hombres adultos. Las mujeres embarazadas permanecen en el pabellón de mujeres y reciben una cantidad adicional de leche y otros productos diarios. Existen guarderías para los menores de tres años, aunque no hay centros especializados destinados a estos niños.

31. En el marco de un programa preventivo, el personal penitenciario se beneficia de servicios de apoyo psicológico, a fin de permitirles hacer frente a la tensión a la que está sometido.

32. Los detenidos tienen derecho a servicios médicos, y el Gobierno ha tomado medidas para garantizar la compra y el abastecimiento de medicamentos y suministros médicos para los lugares de detención. Se han firmado una serie de acuerdos con diferentes organismos internacionales como el Fondo Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, el Gobierno trabaja con una decena de ONG para mejorar las condiciones de detención y ajustarlas a las normas internacionales.

33. Se ha invitado a medios de comunicación, organizaciones internacionales y ONG a visitar los lugares de detención, incluidas las oficinas administrativas, las celdas, los comedores y las cocinas, con el fin de disipar cualquier idea errónea acerca de estas instituciones.

34. **El Sr. Salimzoda** (Tayikistán) desea destacar que los medios de comunicación han publicado varios reportajes sobre las cuatro visitas conjuntas a centros de detención realizadas en los últimos dos años por organizaciones internacionales, expertos a título individual, ONG y medios de comunicación.

35. La Fiscalía Militar supervisa regularmente las instalaciones militares con el fin de garantizar que cumplen la ley. Ha habido denuncias de malos tratos, como las novatadas; estos delitos son objeto de sanción. Para eliminar las novatadas entre el personal militar, la Fiscalía Militar estableció una unidad móvil y un servicio de asistencia telefónica especializada en las instalaciones del ejército; en 2010 se abrieron procedimientos penales como consecuencia de las llamadas a este servicio de asistencia telefónica. Las denuncias de novatadas han venido disminuyendo cada año. Tras haber examinado los 125 expedientes relativos a actuaciones penales incoadas desde 2010, 114 de los cuales se han remitido a los tribunales, el orador puede afirmar con total confianza que las novatadas denunciadas ante el Comité, en particular el trato degradante por parte de los oficiales no se produjeron. Por otro lado, desde 2000 se están haciendo notables esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en los cuarteles militares, por ejemplo proveyéndolos de instalaciones sanitarias adecuadas.

36. Los familiares de las personas fallecidas en los lugares de detención pueden acceder a los cuerpos y tienen pleno derecho a solicitar que un patólogo forense realice una autopsia independiente si así lo desean.

37. **El Sr. Azizov** (Tayikistán) dice que la Asociación de Jóvenes Juristas (Amparo) fue disuelta porque cambió de domicilio legal y no se registró convenientemente, contraviniendo la Ley sobre Organizaciones; además, vulneró la ley al seguir funcionando y estableciendo oficinas regionales sin registrarlas. Dado que el caso está actualmente ante el Tribunal de Casación, cualquier discusión al respecto puede interpretarse como una injerencia; lo apropiado es esperar a que se emita un fallo.

38. **El Sr. Tugushi** (Relator para el país) dice que el Estado parte ha hecho claros progresos en relación con la mejora gradual de la legislación vigente. El Comité ha observado que han aumentado las obligaciones internacionales contraídas por el Estado parte, la colaboración de este con los asociados internacionales y las ONG en la mejora de la legislación nacional y las medidas decisivas que ha tomado para mejorar el desempeño judicial en ámbitos de particular interés para el Comité. En su evaluación de la aplicación de la Convención, el Comité se interesa tanto por la legislación nacional como por las prácticas empíricas.

39. El Relator pide a la delegación que aclare el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, que establece que las pruebas obtenidas ilegalmente son inválidas; en efecto, “inválidas” no significa “inadmisibles”. Además, no parece haber ningún mecanismo por el cual las pruebas se puedan declarar inadmisibles ni disposición alguna sobre las medidas que deben tomar los tribunales cuando las pruebas se hayan obtenido mediante tortura o malos tratos. Es más, la ley no parece prever el encausamiento de los sospechosos de tales actos.

40. El Relator pregunta si se ha aplicado en la práctica la decisión del Tribunal Supremo que aclara el significado del artículo 143 1) del Código en lo que concierne a la tortura y al concepto de inadmisibilidad de las pruebas obtenidas ilegalmente, y si los tribunales han rechazado alguna vez este tipo de pruebas.

41. En cuanto a las salvaguardas contra la tortura y los malos tratos, el Comité ha sido informado de que, en la práctica, las autoridades investigadoras no observan el plazo de 12 horas dentro del cual deben notificar la detención a los familiares del detenido. Además, debería establecerse claramente que la privación de libertad empieza en el momento en que se obliga a una persona a permanecer en las instalaciones de la policía u otra autoridad

facultada para realizar la detención, no cuando la persona ingresa en un centro de detención. Desde el primer momento de la detención de una persona se le debe informar de sus derechos en un idioma que pueda comprender.

42. ¿Pueden los detenidos elegir que los examine un médico forense independiente en lugar de uno vinculado al centro policial?

43. El Relator invita a la delegación a dar más datos sobre la cuestión de la impunidad, ya que el Comité ha recibido numerosas denuncias de que, en virtud del artículo 143 1) del Código Penal, los autores de actos de tortura suelen ser sancionados con penas que no se corresponden con los delitos que han cometido.

44. Al Comité le gustaría que el propio Defensor del Pueblo hablase sobre el funcionamiento de su recién creada oficina y espera que, en un futuro, sus informes sirvan de base para la discusión, en particular los que conciernen a la inspección de los lugares de detención. La delegación ha informado al Comité de las visitas de inspección de las prisiones. Sin embargo, no ha mencionado visitas a las comisarías de policía ni a los centros administrados por los servicios de seguridad del Estado. La Defensoría del Pueblo está facultada para realizar visitas sin previo aviso y sus representantes deberían estar autorizados por ley a entrevistarse con las personas detenidas, en privado y en un lugar de su elección; entre el personal presente en las visitas preventivas debería haber médicos forenses. En la mayoría de los países, los actos de tortura y malos tratos suelen producirse durante la custodia policial. La vigilancia independiente debería abarcar, prioritariamente, los establecimientos policiales, pero también los centros administrados por el ejército y los servicios de seguridad.

45. La delegación ha indicado que el Estado parte no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura porque no tiene suficientes fondos para establecer el mecanismo nacional exigido. Ahora bien, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros organismos apoyan esa labor y han establecido un fondo con ese fin.

46. Hay que elogiar que Tayikistán haya declarado una moratoria sobre el uso de la pena de muerte y cabe esperar que las autoridades terminen por abolirla.

47. Aunque se han dado muchos pasos favorables para combatir la violencia doméstica, es necesario tomar más medidas, ya que el problema parece grave. El proyecto de ley sobre este asunto debería aprobarse con prontitud.

48. Por último, el Relator solicita información actualizada sobre la investigación penal de lo sucedido en Jorog, donde se desarrollaron operaciones militares que afectaron a varios civiles.

49. **La Sra. Sveass** (Relatora para el país) está al corriente de que, en colaboración con varias organizaciones internacionales, se ha impartido formación relativa a los exámenes forenses, la realización de entrevistas con las víctimas de tortura y la evaluación de su estado de salud; entiende que se trata de un proceso de largo plazo, pero confía en que la formación sea buena. ¿Cómo se emplean estos conocimientos? ¿Trabaja el personal médico competente de conformidad con los requisitos específicos del Protocolo de Estambul? ¿Se utilizan sus informes como base para determinar la reparación de la víctima y el tratamiento que debe recibir o solo con vistas a las actuaciones judiciales derivadas de la presentación de una denuncia? En los 130 casos que menciona la delegación, 39 de los cuales ya han dado lugar a condenas, ¿e han utilizado informes periciales realizados por forenses dotados de una formación sólida y de todo el material necesario? En los casos de los tres menores víctimas de tortura, ¿han presentado informes los médicos y psicólogos que evaluaron las consecuencias para las víctimas de tales actos?

50. La delegación ha señalado que a las víctimas de actos de tortura se les paga una indemnización incluso si la persona condenada por ello es absuelta en virtud de leyes de amnistía. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Convención exige que las penas sean acordes a la gravedad del delito, la Relatora desea saber por qué se libera a las personas declaradas culpables de actos de tortura.

51. La Relatora pregunta si las estrictas reglas que garantizan la confidencialidad de las denuncias se respetan de manera sistemática en todos los lugares de detención, incluidos los hospitales psiquiátricos, y si las personas que presentan denuncias padecen acoso, como indica el informe de Amnistía Internacional. ¿Se han investigado estas vulneraciones de la confidencialidad?

52. El Comité toma muy en serio las denuncias según las cuales algunas de las personas que quisieron hablar con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante su visita al Estado fueron objeto de amenazas y acoso. Los defensores de los derechos humanos y demás personas que quieran dar a conocer la información de que disponen deben ser protegidos.

53. La Relatora pregunta qué medidas se han tomado para regularizar la situación de la Asociación de Jóvenes Juristas (Amparo) si las razones para su disolución son puramente formales. Además, solicita información actualizada sobre las investigaciones de las amenazas contra periodistas. El Comité también agradecería que se le diese más información sobre las investigaciones realizadas en relación con los actos de tortura cometidos durante el período de agitación transcurrido entre 1995 y 1999 y las reparaciones concedidas a las víctimas de dichos actos.

54. Los datos sobre la mejora de las condiciones de detención resultan alentadores, y el Comité celebra que la delegación admita con franqueza que quedan problemas por resolver. En relación con la reforma de la legislación sobre los menores infractores y las denuncias de abusos cometidos contra menores detenidos en dependencias policiales, la Relatora desea saber qué mejoras se prevén para garantizar que estos no padezcan violencia en los centros de detención.

55. Además, el Comité querría saber si se ha proporcionado seguimiento y apoyo a las 35 víctimas de la trata que han regresado al Estado parte, y qué medidas se han adoptado para evitar esta práctica y para proteger y asistir a las víctimas.

56. ¿Prevé el Estado parte aprobar una ley que penalice la violencia contra las mujeres? ¿En la práctica, pueden las mujeres y los niños víctimas de actos de violencia presentar denuncias sin exponerse al acoso o a otros peligros?

57. **El Sr. Bruni** desea conocer las dimensiones concretas de las celdas de castigo y las de las celdas normales.

58. El orador pregunta cómo concilia el Estado parte la garantía del acceso público a las prisiones, por ejemplo en forma de visitas de las ONG, con la declaración que figura en la respuesta a la lista de cuestiones según la cual la información relativa al sistema penitenciario, como por ejemplo el número de presos, es un secreto de Estado.

59. **La Sra. Belmir** pide más información sobre la independencia del poder judicial y sobre la función y las facultades del Fiscal General. También pide detalles sobre el manual de buenas prácticas en materia de interrogatorio y, en particular, datos más específicos sobre el proceso del interrogatorio.

60. **El Sr. Domah** reitera su pregunta sobre el *habeas corpus* y señala que cualquier reforma legislativa debería incorporar ese principio. Hasta ahora no se ha proporcionado ninguna respuesta a la preguntas sobre la amnistía, que no debería aplicarse en casos de tortura.

61. El orador pregunta cuánto se ha avanzado en la aplicación de las reformas del Código de Procedimiento Penal.
62. Refiriéndose a la ONG promotora de campañas en favor del estado de derecho que fue obligada por el Gobierno a interrumpir sus actividades por motivos técnicos, relacionados con su registro, el orador pregunta quién tomó esa decisión y con qué fundamento.
63. **El Sr. Mariño Menéndez** pregunta en qué momento se hace constar oficialmente la privación de libertad tras el arresto. Solicita más detalles sobre el uso de la reclusión en régimen de aislamiento: en qué circunstancias se utiliza, cómo se cumple la pena y cuánto dura el aislamiento. También pregunta si los tribunales militares juzgan casos de delitos contra civiles.
64. El orador solicita más información sobre las salvaguardas relativas a los procedimientos de extradición y los procesos de apelación, y observa que las decisiones relativas a las demandas de asilo parecen basarse en motivaciones políticas y no son susceptibles de recurso.
65. **La Sra. Gaer** se refiere al caso de Hamza Ikromzoda, mencionado con anterioridad, y señala que todavía no ha recibido respuesta de la delegación al respecto. Existen razones adicionales para creer que los testigos de ese caso padecieron represalias o malos tratos.
66. La oradora se refiere a los informes de la BBC, según los cuales, a principios de noviembre de 2012, se trasladó repentinamente a otro establecimiento penitenciario a más de 50 reclusos, entre ellos varios testigos del caso Hamza Ikromzoda. Estos denunciaron que habían sido golpeados y que no se les había dado justificación alguna para su traslado. La oradora solicita aclaraciones al respecto. Si el Estado parte no dispone de la información al momento, solicita que el asunto sea investigado.
67. La oradora pregunta por el estado actual de la legislación sobre violencia doméstica. Dado que el proyecto de ley sobre este asunto se ha ido diluyendo hasta acabar descartado, pregunta si se prevén nuevas medidas para aprobar una ley sobre violencia doméstica y si la violencia de género constituye un delito.
68. **El Presidente** solicita más información sobre la moratoria a la pena de muerte y las actividades del grupo de trabajo encargado del asunto. Pregunta si se llevan a cabo autopsias en todos los casos de suicidio o fallecimiento durante el interrogatorio. ¿Se indemniza a las víctimas incluso cuando se aplican leyes de amnistía? Solicita más datos sobre las leyes de difamación y sobre si el Estado parte prevé introducir la responsabilidad civil.
69. Pregunta cuánto dura la prisión preventiva y si las investigaciones preliminares se realizan con prontitud. Solicita aclaraciones sobre los castigos corporales en Tayikistán, particularmente en el ámbito escolar.
70. **El Sr. Salimzoda** (Tayikistán) dice que, conforme a lo dispuesto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal, las pruebas obtenidas bajo coacción no son válidas. Por lo tanto, si un tribunal determina que las pruebas han sido obtenidas bajo coacción, el acusado será puesto en libertad y recibirá una indemnización.
71. Cuando se detiene a una persona, debe informarse a su familia en el plazo de 12 horas; de no procederse así, podrían imponerse sanciones a los responsables. La privación de libertad se registra cuando la persona ingresa en un centro de detención. Los jueces están facultados para recalificar los delitos. Por ejemplo, en un caso reciente, una acusación de asesinato se redujo a la de vandalismo.

72. En relación con la situación en Jorog, las bandas armadas han sido desmanteladas y hay una investigación penal en curso. Se están usando informes forenses para determinar la causa del fallecimiento o las lesiones de las víctimas. Los informes médicos son obligatorios en casos en que se han presentado pruebas de actos de tortura. La legislación vigente prevé el procedimiento de denuncia para los casos de tortura, cuestión a la que el Estado parte presta actualmente particular atención. Entre otras medidas, se ha establecido una unidad especial y una línea directa de atención telefónica, y las denuncias se presentan de manera anónima.

73. Tras señalar que se han adoptado medidas legislativas y se han organizado cursos de formación para garantizar que no se utilicen métodos ilegales en los interrogatorios, el orador solicita que se le aclare la pregunta del Comité sobre el uso de la reclusión en régimen de aislamiento.

74. Los tribunales militares examinan los casos que se les presentan del mismo modo que lo hacen los otros tribunales, solo que cuentan con personal judicial especializado. No existen tribunales provisionales especiales.

75. En relación con el caso de Hamza Ikromzoda, que se ahorcó en prisión, se ha presentado una demanda contra el personal de la prisión y existe una investigación en curso. Se ha realizado una autopsia y los familiares han podido acceder al cuerpo. El caso se encuentra ahora ante el Fiscal General.

76. En el incidente de noviembre al que se refirió la Sra. Gaer, se trasladó a unos presos a unas instalaciones dotadas del nivel de seguridad necesario. La investigación preliminar está aún en curso, pero los exámenes forenses han confirmado que no se produjeron lesiones.

77. El proyecto de ley sobre violencia doméstica está siendo examinado por el Parlamento.

78. Hasta la fecha se ha trabajado mucho en lo que concierne a la pena de muerte. La moratoria de 2004 fue una medida legislativa pionera en la región. Actualmente hay menos resistencia de la opinión pública a la abolición de la pena capital, y aunque la delegación no puede proporcionar un calendario concreto, sí puede afirmar que se están tomando medidas encaminadas a abolirla.

79. El orador confirma que en los casos de muerte violenta se realizan autopsias.

80. Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal prevén que, en casos en que se denuncie que las pruebas han sido obtenidas mediante tortura, el juez de instrucción determina, en el marco del procedimiento contradictorio, la validez de tales pruebas. En los procesos judiciales se utilizan informes médicos, entre ellos los relativos a la prisión preventiva, y dichos informes pueden servir de base para interponer un recurso de apelación.

81. De conformidad con el Código de Procedimiento Penal, los tribunales militares entienden en causas relativas a delitos cometidos contra civiles.

82. El Consejo de Justicia se encarga de la administración de justicia, la capacitación, la gestión del personal, las cuestiones de organización y la asistencia material proporcionada a los juzgados.

83. **El Sr. Alizoda** (Tayikistán) afirma que el Defensor del Pueblo visita las comisarías de policía, las instituciones psiquiátricas y los hospitales, así como los centros de detención. Las entrevistas son confidenciales. Se sigue trabajando en el sistema de presentación de informes y de capacitación, y se prevé elaborar un informe especial sobre el tema del seguimiento. Por lo que se refiere al principio de *habeas corpus*, los detenidos tienen derecho a recurrir y a recibir asistencia letrada.

84. **El Sr. Abdulhakov** (Tayikistán) señala que en su país existe un correccional de menores para jóvenes infractores.

85. En virtud de la reglamentación anterior, el tamaño mínimo de las celdas de castigo era de 2 m² por persona, y el de las celdas normales, de 2.5 m². Las celdas de las cárceles de mujeres y de los establecimientos de rehabilitación o de trabajo eran más amplias. Conforme a las nuevas normas, las celdas individuales deben medir, como mínimo, 4 m².

86. **La Sra. Sveaass**, refiriéndose a las recomendaciones formuladas en 2006, solicita mas información sobre las medidas de investigación e indemnización relativas al período de 1995 a 1999, es decir, el período de conflicto. Pregunta por qué la vigilancia de los centros de detención constituye un secreto de Estado.

87. **El Sr. Bruni** pregunta por qué las estadísticas sobre las cárceles no están a disposición del público.

88. **El Sr. Tugushi** pregunta si el Estado parte prevé eliminar la prisión en régimen de aislamiento para los reclusos condenados a cadena perpetua y derogar las leyes sobre el contacto de los detenidos con los abogados y la familia. Le gustaría saber si se tomarán medidas para mejorar el acceso de los condenados a la representación letrada.

89. **El Sr. Salimzoda** (Tayikistán) afirma que, en efecto, la información sobre las prisiones constituye un secreto de Estado, pero la cuestión está actualmente debatiéndose.

90. El orador destaca los progresos realizados por su país desde la independencia, como, por ejemplo, las leyes de amnistía en virtud de las cuales se ha puesto en libertad a un gran número de prisioneros. Este es un ejemplo de los esfuerzos que se han realizado para proteger los derechos y libertades.

91. Las disposiciones relativas a la cadena perpetua se adoptaron apenas hace poco, y, aunque actualmente no existen instalaciones especiales para este tipo de pena, se procura que los pocos reclusos que cumplen esta condena disfruten de las mejores condiciones posibles. Recientemente, el Tribunal Supremo conmutó algunas condenas a cadena perpetua por penas menos severas.

92. Los reclusos condenados solo pueden acceder a un abogado si surgen cuestiones jurídicas concretas. Hace poco, el Presidente realizó declaraciones públicas sobre la cuestión de la tortura, a la que se le ha dado carácter prioritario. Desde 2002, el Estado parte ha progresado en la plena aplicación de las normas y principios democráticos.

93. La ONG mencionada por la Sra. Sveaass y el Sr. Domah no ha podido cumplir con las disposiciones legislativas pertinentes y, por tanto, ha sido obligada a interrumpir sus actividades.

94. **El Presidente** manifiesta su satisfacción por las contribuciones de la delegación y por su participación en el diálogo constructivo con el Comité.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.